

**Incluso un pueblo
de demonios:
democracia, liberalismo,
republicanismo**

Del mismo autor

Contracromagnon: nacionalismo, ciudadanía, democracia,
Barcelona, 2006

Proceso abierto: el socialismo después del socialismo,
Barcelona, 2005

*El compromiso del método: en el origen de la teoría social
posmoderna,* Barcelona, 2004

Félix Ovejero

**Incluso un pueblo
de demonios:
democracia, liberalismo,
republicanismo**



conocimiento

Primera edición, 2008

© Katz Editores
Charlone 216
1425-Buenos Aires

28009 Madrid
www.katzeditores.com

© Félix Ovejero

ISBN Argentina: 978-987-1283-93-4
ISBN España: 978-84-96859-47-0

1. Democracia. I. Título
CDD 323

El contenido intelectual de esta obra se encuentra protegido por diversas leyes y tratados internacionales que prohíben la reproducción íntegra o extractada, realizada por cualquier procedimiento, que no cuente con la autorización expresa del editor.

Diseño de colección: tholön kunst

Impreso en España por Romanyà Valls S.A.
08786 Capellades
Depósito legal: B-52.559-2008

Índice

11	Prólogo
19	I. Democracia sin ciudadanos
20	El deterioro de la cultura cívica
24	La calidad de los ciudadanos
38	¿Dónde está el problema?
PRIMERA PARTE	
DEMOCRACIA Y LIBERALISMO	
43	II. La democracia liberal
47	El liberalismo y la democracia
51	El funcionamiento de la democracia liberal
54	Diferencias entre el mercado y la democracia
56	Dos democracias liberales
58	La teoría (económica) de la democracia
62	El mercado político: la demanda de los ciudadanos
65	Los problemas de la demanda: la voluntad popular
68	El mercado político: la oferta de los representantes
70	Reglas de elección y negociación
74	Las consecuencias de la teoría de la democracia: dos interpretaciones
81	III. La fundamentación liberal de la democracia
81	Ideas de democracia
88	La democracia liberal de mercado
94	La democracia liberal deliberativa
103	El liberalismo de la democracia liberal
109	IV. Democracia liberal y mercado

- 111 La democracia frente al mercado
- 112 Al mercado le conviene la democracia...
- 116 ...pero a la democracia no le conviene el mercado

SEGUNDA PARTE

DEMOCRACIA Y REPUBLICANISMO

- 127 v. Las democracias republicanas
- 131 Ideas de democracia y republicanismismo
- 136 Estrategias republicanas
- 139 Igualdad
- 145 Autogobierno
- 150 Libertad

- 157 vi. Deliberación y democracia
- 158 Argumentar, negociar, votar
- 162 Democracia sin deliberación
- 163 El proceso deliberativo
- 166 Las razones de la deliberación
- 169 Problemas de las razones
- 172 Deliberación y justificación epistémica
- 175 Democracia y justificaciones epistémicas
- 178 Problemas de la deliberación
- 179 Honestidad de las opiniones
- 180 Elitismo
- 181 Poder o razones
- 183 Imposibilidad de acuerdos
- 185 Fronteras de la deliberación

TERCERA PARTE

LOS MOTIVOS DE LOS CIUDADANOS

- 191 vii. Los motivos liberales: entre el mercado
y la democracia
- 195 Razones para actuar, razones para decidir
- 196 Motivaciones en la justicia
- 200 Motivaciones en la producción
- 205 Motivaciones en la política

- 219 viii. Los motivos republicanos: la virtud cívica
- 220 Los republicanismos y la participación
- 222 El problema (de Rawls) con la virtud

225	El liberalismo y la virtud
226	Modelos de virtud cívica
236	Virtud, democracia y libertad
239	ix. En el origen de las motivaciones
242	La disposición social
248	El mercado como solución
252	El mercado contra la disposición social
255	El vínculo cívico
260	El vínculo emocional
267	El instinto social

CUARTA PARTE

FUNDAMENTACIONES DE LA DEMOCRACIA

279	x. Tres miradas sobre tres democracias
284	Perspectivas sobre la democracia
286	La democracia como instrumento
289	La fundamentación instrumental
295	Límites de la fundamentación instrumental
300	La democracia como historia
303	La argumentación historicista
306	Límites de la fundamentación histórica
315	La democracia como principio
318	La argumentación epistémica
335	Sobre la relación entre fundamentación epistémica y democracia republicana
337	El paso deliberativo: las condiciones de la deliberación
339	El paso democrático: la participación y la deliberación
341	Sobre la relación entre consecuencialismo y fundamentación epistémica
345	Para terminar: de la filosofía política a la política

La constitución republicana es la única perfectamente adecuada al derecho de los hombres; pero es muy difícil de establecer, y más aún de conservar, hasta el punto de que muchos afirman que la república es un Estado de ángeles, y que los hombres, con sus tendencias egoístas, son incapaces de vivir en una constitución de forma tan sublime. Pero la Naturaleza viene en ayuda de la voluntad general, fundada en la razón de esa voluntad tan honrada y enaltecida en teoría como incapaz y débil en la práctica. Y la ayuda que le presta la Naturaleza consiste precisamente en aprovechar esas tendencias egoístas; de suerte que sólo de una buena organización del Estado dependerá –y ello está siempre en la mano del hombre– el que las fuerzas de esas tendencias malas choquen encontradas y contengan o detengan mutuamente sus destructores efectos. El resultado, para la razón, es el mismo que si esas tendencias no existieran, y el hombre, aun siendo moralmente malo, queda obligado a ser un buen ciudadano. El problema del establecimiento de un Estado tiene siempre solución, por muy extraño que parezca, incluso cuando se trate de un pueblo de demonios; basta con que éstos posean entendimiento. El problema es el siguiente: “He aquí una muchedumbre de seres racionales que desean, todos, leyes universales para su propia conservación, aun cuando cada uno de ellos, en su interior, se inclina siempre a eludir la ley. Se trata de ordenar su vida en una constitución, de tal suerte que, aunque sus sentimientos íntimos sean opuestos y hostiles unos a otros, queden contenidos, y el resultado público de la conducta de esos seres sea el mismo exactamente que si no tuvieran malos instintos”. Este problema tiene que tener solución.

Immanuel Kant

Pero ¿qué es el gobierno, si no la más grande reflexión sobre la naturaleza humana?

Alexander Hamilton

La sabiduría y el saber, así como la virtud difundidos generalmente entre el pueblo (son) necesarios para la conservación de los derechos y libertades.

Constitución de Massachusetts, 1780

Prólogo

El argumento más poderoso en contra de la democracia es cinco minutos con el votante medio.

Winston Churchill

La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente.

George Bernard Shaw

Nixon sudó y perdió las elecciones.

Algo pasa con la democracia si las elecciones dependen de tener a mano un desodorante. Han transcurrido muchos años desde los sudores en mala hora de Nixon y no parece que las cosas vayan mejor. Más bien al contrario. En el entretanto hemos descubierto la importancia del color de las corbatas, de la dirección de la mirada, de la lucecita roja que en los mítines indica que hasta entonces sólo se trataba de matar el tiempo y que empieza lo importante, los segundos de conexión televisiva. Los ciudadanos parecen decidir su voto por las cosas más peregrinas. La calidad de las ideas parece contar poco. Los políticos lo saben y, se resignen o no, actúan en consecuencia. Hace cerca de ochenta años, un discípulo de Pavlov –Tchakhotine– mostró cómo el nazismo utilizó las estrategias de la publicidad comercial americana, y ahora mismo la izquierda no tiene reservas en acudir a los resultados más recientes de la lingüística y de las ciencias cognitivas para arropar sus propuestas de modo que resulten sugestivas: una tecnología del camelo, se mire como se mire.

Por lo general, a un arranque como el anterior le sigue un párrafo jere-miaco a cuenta del paraíso perdido. Porque, según parece, hubo un tiempo en el que las cosas eran de otro modo, en el que la disputa política asegu-

raba el triunfo de las mejores ideas. Un tiempo en el que la vida democrática era “un intercambio de opiniones guiado por el objetivo de convencer al adversario por medio de argumentos de la verdad o la justicia de algo, o permitir que él también pueda persuadirnos a nosotros”, para decirlo en palabras de Carl Schmitt, aquel inteligente teórico del nazismo que, andando el tiempo y sin desdecirse finalmente de todo, acabó estableciendo una amistad intelectual con el eurocomunista Santiago Carrillo y proporcionando arsenal argumental a una parte importante de la extrema izquierda europea.

Pero no es verdad que lo que es hoy nada tiene que ver con lo que fue. También ahora los lodos de estos días no son ajenos a los polvos de otro tiempo. La moderna democracia se configuró desde bien temprano con una mirada desconfiada hacia los ciudadanos, sobre todo hacia los más pobres. A la hora de justificar el cómo y el porqué de la Constitución americana, sus inspiradores, los federalistas, mostraron de mil maneras su inquietud por la participación de unos ciudadanos para los que “las disquisiciones más frívolas y caprichosas han bastado para encender sus pasiones hostiles y excitar sus conflictos violentos” (Publius, *The Federalist Papers*, 10). Algo menos sutiles eran el reposado George Washington (“multitud pacedora”) y el vehemente John Adams (“vulgar rebaño del género humano”). Es lo que pasa con la pobreza, que se tiene poco tiempo para pensar y ninguno para hacerlo en condiciones de autonomía. Lo sabemos, por lo menos, desde Aristóteles: salvo que se sea un dios, quien no tiene recursos no puede decir que no. “La dependencia engendra sumisión ciega y venalidad, ahoga el germen de la virtud”, nos dirá bastante tiempo más tarde Thomas Jefferson. Durante bastante tiempo, los liberales que defendían el voto censitario, que eran los más, echaron mano de esa circunstancia, de la supuesta insensatez de los de abajo.

Y no les faltaba razón: la independencia económica es condición para la independencia de juicio. Lo malo era la implicación que de ello extraían. En lugar de recomendar que se actuara sobre el orden del mundo, sobre una desigualdad que adulteraba la condición de ciudadano, recomendaban limitar el voto a quienes podían decir que no, que, ¡oh cosa prodigiosa, oh, maravillas de la mente dormida!, eran los mismos que hacían las preguntas. Ése será el cuerno del dilema que explotará buena parte de la tradición liberal: las instituciones, en lo posible, deberán ser impermeables a la voz de ciudadanos que estaban desprovistos de virtud. Desde entonces, la falta de virtud ciudadana forma parte del guión con el que se han diseñado las instituciones democráticas. Por ello, lamentarse de la mala calidad de los votantes es como lamentarse de que en el fútbol traten el balón

a patadas. Cuando el propio mecanismo democrático está concebido para prescindir de la participación resultan poco convincentes los gimoteos ante la falta de participación. Es lo previsto. En realidad, para el liberalismo la apatía o la falta de participación son más una solución que un reto. Los lamentos por el deterioro de la cultura cívica no resultan menos retóricos que las periódicas quejas acerca de la irrelevancia de las deliberaciones en el legislativo, la vaciedad indiferente de los programas, la conversión de los partidos en maquinarias electorales, la ausencia de debates de ideas, la proliferación de populismos y de mercadería política o las dificultades de financiación de los partidos. Escándalos de fariseo.

El otro cuerno del dilema, la otra posibilidad –cambiar el mundo y, a la vez, dar voz a los de abajo– será la propuesta de una izquierda en la mejor parte de su historia, aquella en la que se batirá por extender el ideal de ciudadanía, empezando por el derecho al voto. Una conquista que debe ser celebrada cuantas veces haga falta y que no hacía sino explotar el ideal de autogobierno, el otro germen, radicalmente igualitario, que, aunque con menos vigor, también estaba en el origen de la moderna democracia. Que las cosas se decantaran de un lado o de otro, del aristocrático o del participativo, será cuestión del ruido y de la furia, de la historia, en la que, por cierto, de a poquito, empezarán a adquirir protagonismo, junto a las clases delimitadas por la propiedad, unos profesionales de la competencia política, que, como nos recordó sistemáticamente Michels en la década de 1920, pronto repararon en que sus intereses no siempre coincidían con los de sus representados.

De una y otra idea de democracia –de la liberal elitista y la republicana igualitaria, y de algunas intermedias– se ocupan las páginas que siguen, pero, conviene precisarlo desde ya, se trata de su esqueleto conceptual, no de su historia. El capítulo que sigue muestra que los argumentos que se aducen para desconfiar de los ciudadanos apuntan, en realidad, a problemas de las instituciones liberales. Los tres siguientes examinan esas instituciones, a partir de la tensión, característica del liberalismo, entre libertad y democracia. En contra de una extendida opinión, el liberalismo tiene importantes puntos de fricción con el ideal democrático. Si todos pueden decidir sobre todo, todos cercenan la libertad de cada cual, dirán los liberales. El liberalismo, comprometido con una precisa idea de libertad, como “ausencia de prohibiciones”, la llamada “libertad negativa”, buscará un modelo de democracia compatible con ella. Como se verá, no lo tiene fácil. Debe resolver un complicado equilibrio entre la institución política (abordar los asuntos públicos), la fundamentación liberal (minimizar las intrusiones públicas), el principio de legitimidad democrática (la voluntad

expresada en votos) y el pesimismo antropológico (ciudadanos ignorantes y egoístas, desprovistos de virtud). La democracia liberal será la cristalización de ese equilibrio. La libertad negativa quedará asegurada de diversos modos. En primer lugar, mediante la profesionalización de la actividad política. A los ciudadanos no cabe reclamarles preocupación por la vida de todos. Ellos, por medio de su voto, seleccionan a unos representantes, una suerte de aristocracia elegida, que, hasta las próximas elecciones, se ocupan de las tareas públicas. En segundo lugar, un amplio catálogo de derechos que, recogidos normalmente en una constitución, impone límites a lo que los ciudadanos pueden votar. Los derechos protegen la libertad y, lo que es más importante, su garantía es externa a la comunidad política, no depende de que los ciudadanos los consideren justos y se comprometan en su defensa. En suma, el mecanismo no requiere virtud ciudadana. Desafortunadamente, como se verá, el guión no funciona, la competencia política no asegura que, con los mimbres de la ignorancia y la indiferencia de los ciudadanos, se pueda identificar a los mejores y trenzar las buenas decisiones políticas. Y ése sí que es un problema serio. El problema, como tal, no es que a las personas no les interese la política. Hay otras muchas maneras en las que llevar una vida razonablemente satisfactoria, otras sendas que caminar sin perder el norte de la felicidad. Lo malo es que cuando cunde el desinterés por la actividad pública se deterioran las condiciones para llevar a cabo cualquier plan de vida, se malbaratan todas las sendas, lo que no puede resultar indiferente al liberal.

La segunda parte se ocupa de la tradición republicana y de su idea de democracia. Una tradición con una historia bastante más larga que la del liberalismo. Acaso por ello, en el caso del republicanismo la tarea cartográfica resulta más complicada y, también, más necesaria. Es cierto que no resulta difícil identificar los conceptos fundamentales, los que, con desigual presencia, aparecen aquí y allá en los autores republicanos: virtud, participación, deliberación, libertad, autogobierno. Otra cosa es cómo se relacionan entre sí o, de otra manera, cuál es el sentido de cada uno y su importancia, cuestiones sobre las que no faltan las discrepancias. Ello no impide reconocer que, unas veces con trazo firme, otras con trazo dubitativo, los republicanos de otro tiempo parecían haber asumido —o, por lo menos, darle vueltas a— unas cuantas tesis: que los ciudadanos sólo son libres si la república está libre de la dominación externa y de la tiranía interna y que para ello se requiere que estén fuertemente comprometidos con su suerte común, que acepten de grado sus deberes políticos y militares; que el peligro fundamental para la república es la corrupción, esto es, que el Estado obedezca los intereses particulares y que el gobierno de las leyes justas se

vea sustituido por el poder arbitrario de los poderosos; que para evitar tales males se necesitan, primero, diseños institucionales, que impidan la concentración de poderes (gobiernos mixtos, en ciertas versiones; separación de poderes, en diversos sentidos), y controles democráticos regulares de los gobernantes; segundo, ciertas condiciones sociales o económicas (propiedad, por ejemplo) que hagan posible la independencia material, y con ella la independencia de juicio, y que limiten la desigualdad, porque en una comunidad con profundas disparidades los ciudadanos no se reconocen con intereses comunes ni partícipes de una sociedad justa y, por ende, resulta improbable el compromiso cívico, y, finalmente, la disposición a la participación activa de las personas, la virtud ciudadana, pues sin virtud quedan sin aliento las mejores leyes e instituciones. En suma: instituciones democráticas, igualdad material y virtud cívica.

En los capítulos quinto y sexto esas distintas ideas se trabarán en un único entramado conceptual. Su austeridad propicia anticiparlo. La ley (justa) es la garantía de una libertad, que se entiende de modo bien diferente al liberal: como ausencia de dominación: se es libre cuando no se está sometido a la voluntad arbitraria de nadie. Pero la ley justa sólo puede ser el resultado de una democracia participativa en grado máximo —que dé la voz a todos—, y deliberativa —que opere según las reglas de una argumentación sometida a los criterios de imparcialidad—, pues de otro modo, la mayoría —la participación— puede imponer su voluntad despótica. Participación y deliberación que resultan impensables sin virtud cívica, sin ciudadanos interesados en los asuntos públicos. Para el republicanismo, muy sumariamente, la democracia no deriva en tiranía cuando es resultado de un proceso deliberativo que sólo es realmente correcto cuando se asegura la máxima participación, que, a su vez, requiere de la virtud ciudadana. Una democracia de esa naturaleza —deliberativa— asegura una ley justa, que es la que hace posible la libertad, el valor más importante para el republicanismo.

Si las cosas son así, el republicanismo escapa al dilema liberal entre libertad y democracia. Eso sí, siempre que la democracia propicie las leyes justas, la libertad o, lo que es lo mismo, si no se excluye, como hace el liberalismo, la posibilidad de la virtud. Reconocer la importancia de la virtud no quiere decir fundamentar el republicanismo en la virtud. El republicanismo no busca la virtud de los ciudadanos, sino las leyes que aseguran la libertad. Otra cosa es que sin virtud no hay buena democracia, esto es, democracia que camine en la misma dirección que la justicia y la libertad. El problema, entonces, es si podemos esperar de las gentes disposiciones cívicas e, inmediatamente derivado de éste, otro: si existen tales disposiciones, cuáles son las condiciones para su desarrollo, para su “despliegue”,

por decirlo à la Hegel. En el caso de que no podamos esperar vocaciones cívicas o de que no se den las condiciones para su ejercicio, quizá sólo quede resignarse a “la solución liberal”, a convivir con la tensión entre libertad y democracia.

En ese sentido, del mismo modo que hay una estrecha relación entre la democracia republicana y la virtud, hay, también, una relación estrecha entre las instituciones liberales y la mala calidad de los ciudadanos. Una vez que se asume la ausencia de virtud ciudadana –la hipótesis del pesimismo antropológico–, las instituciones de la democracia liberal parecen el único modo de defender la libertad: si se presume que los procesos de decisión se rigen por intereses, para evitar que las mayorías exploten a las minorías resulta obligada una protección mediante derechos; si no cabe esperar un compromiso con el bienestar de los conciudadanos y la neutralidad liberal veta entrometerse alentando valores cívicos, sólo cabe pensar en una protección *prepolítica* de los derechos y de la “privacidad”; si la ciudadanía es indiferente a los asuntos públicos, parece inevitable la delegación de las decisiones a los profesionales de la política.

Así las cosas, la reflexión sobre las ideas de democracia conduce obligadamente a evaluar el pesimismo antropológico, tarea que ocupa la tercera parte del libro. Y es que la reflexión normativa, si no quiere sostenerse en el aire sin el oxígeno de las definiciones, un juego circular donde las buenas palabras se remiten y sustentan unas a otras, tiene que buscar, más temprano que tarde, anclajes empíricos. Es fácil dibujar paraísos poblados por ángeles. Pero, salvo para la novelería, carecen de todo interés. Si nos importa la democracia no es por el discutible placer de la pirotecnia verbal, sino porque aspiramos a ordenar cabalmente el mundo. Por eso, en alguna hora, hay que echar cuentas con la realidad y, en el caso de la democracia, eso quiere decir, muy fundamentalmente, con lo que sabemos sobre las disposiciones, egoístas o cooperativas, de los humanos.

El libro se cierra con un largo capítulo, de corte más característicamente filosófico, en el que se examinan las distintas ideas de democracia en su relación con las distintas tendencias de la filosofía política contemporánea.

* * *

Algunas de las páginas que siguen incorporan materiales que en versiones previas han visto la luz en forma de conferencias, artículos en revistas o en obras colectivas: en el seminario de filosofía de la fundación March, en las revistas *Claves de razón práctica*, *Revista de libros*, *Doxa*, *Isegoría*, y en los libros *Teoría política* y *El saber del ciudadano*, editados por Alianza. De todos

modos, los textos originales se han reordenado y modificado, y se han insertado en una argumentación más general hasta dar con una estructura unitaria. Recogen unos cuantos años de darle vueltas a los problemas de la democracia y, al fin, a lo que importa: a ver de qué modo la teoría social puede ayudarnos a hacer la vida más digna y llevadera. En esa andadura algunas gentes han acompañado al autor en distintos trechos, mejorando sus reflexiones y a él mismo. Dificilmente puede uno agradecer debidamente las buenas compañías, las de los papeles o las otras, y, sobre todo, las de los papeles y las otras. Es poca cosa dejar constancia de su nombre aquí, pero por algún sitio hay que empezar. Francesc de Carreras, Álvaro Delgado-Gal, Javier Gomá, Roberto Gargarella, Jesús González Amuchástegui, Emilio Lamo de Espinosa, Josep Lluís Martí, Javier Peña y Alfonso Ruiz Miguel, José María Sauca, Ramón Vargas-Machuca y Fernando Vallespín tuvieron a bien asistir a un seminario en la fundación Juan March en el que, a propuesta de Javier Gomá, discutimos algunas de las ideas aquí recogidas. En los “I Encuentros de Canarias sobre ciudadanía y democracia en España y Latinoamérica”, Ernesto Garzón Valdés y Javier Muguerza, maestros y amigos, me invitaron a exponer las tesis con las que arranca este trabajo. Aurelio Arteta, sabe Dios por qué, se ha interesado siempre por las cosas que sobre estos asuntos ha ido escribiendo uno y, con paciencia y perseverancia, fue embarcándose en empeños colectivos que, andando el tiempo, han acabado por encontrar su versión última en las páginas que siguen.

I

Democracia sin ciudadanos

Democracia es un sistema de gobierno en donde puedes decir lo que piensas incluso si no piensas.

Anónimo

Abundan las señales de que los ciudadanos han perdido interés por la política. La constatación de esa circunstancia acostumbra a preceder a un lamento y, poco más tarde, a la recomendación de alentar la cultura ciudadana. Casi siempre. Porque el lamento no es generalizado y, con frecuencia, ni siquiera es honesto. Para una parte importante del pensamiento conservador, la democracia puede prescindir de los ciudadanos. Incluso más: es mejor que prescinda. Llanamente, no serían de fiar. Para llegar a esa conclusión se han aducido diversos argumentos. Por lo general, todos ellos son diversas variantes de una idea bien sencilla: los ciudadanos serían poco menos que idiotas y, por ende, sus elecciones una idiotez superlativa. Idiotas en cualquiera de las acepciones de la palabra: en la griega, la que se aplica al ciudadano vuelto hacia sí mismo, que ignora a los demás, lo público; o en las más recientes, la originariamente francesa, como ignaro, como desinformado, o, la más común, como trastornado, como incoherente.

Cuando se sopesan los problemas invocados para desconfiar de los ciudadanos se repara en que atañen menos a la calidad de los ciudadanos que al diseño de las instituciones. Un diseño que responde a la exigencia liberal de asegurar la libertad negativa, de minimizar las intromisiones en la vida de los ciudadanos, como se verá. En realidad, la democracia moderna está pensada para operar con ciudadanos ignorantes y egoístas, despreocupados por la cosa pública. A la manera del mercado, las reglas del juego asegurarían que, sin información y sin virtud, se alcancen los buenos resultados. Hay algunas dudas acerca de que el mercado, el real, funcione con máxima eficacia. Con la democracia no las hay. Sencillamente, no funciona,

no asegura las mejores decisiones, las que, por ejemplo, adoptarían –si se eligieran– los más competentes. Y el problema no es circunstancial, no es reparable sazonando a la ciudadanía con unas gotas de “educación cívica”. El diseño institucional del mecanismo democrático y la propia naturaleza de la actividad política se combinan para hacer improbable el buen funcionamiento del mercado político.

En lo que sigue empezaré por acotar algunos de los ámbitos de deterioro de la cultura cívica. Después evaluaré el alcance de los argumentos de quienes sostienen que es mejor prescindir de la voz de los ciudadanos. Se verá que los problemas que señalan, reales, tienen más que ver con las instituciones que con los ciudadanos. En cierto modo, la denuncia sobre la pérdida de cultura cívica tiene algo de paradójico, si no de hipócrita: lamentan lo inevitable, lo que forma parte del programa. Las instituciones liberales, en particular la democracia, han sido pensadas –en la medida en que las instituciones son resultado de “un pensamiento”, de una planificación– para prescindir de la voz de los ciudadanos. La ignorancia y el desinterés serían su natural combustible. Algo que, como tal, no es condenable. No está escrito en las estrellas que la vida más plena sea la vida del ciudadano activo y hay instituciones como el mercado que, mal que bien, parecen funcionar con el egoísmo y la desinformación de sus protagonistas. El problema, como se argumentará, es que ése no es el caso de la democracia.

EL DETERIORO DE LA CULTURA CÍVICA

Entre las diversas tendencias que podemos expurgar en la evolución de las democracias hay dos que dan pie a quejumbres generalizadas: el aumento de la abstención y la desinformación de los ciudadanos respecto de los negocios políticos. En un sentido trivial, los dos aspectos parecen estar relacionados, incluso causalmente: la ignorancia, la falta de cultura, explicaría la abstención. Pero también cabría un camino de vuelta: la abstención, el desinterés de los ciudadanos por los asuntos colectivos, daría cuenta de la falta de cultura, “a qué informarse, si no me voy a poner en ello”, vendrían a decir.¹

¹ Diversas investigaciones confirman que la probabilidad de votar aumenta con el nivel educativo. El desacuerdo aparece a la hora de explicar esa relación. Véase S. Tenn, “The effect of education on voter turnout”, *Political Analysis*, 15, 2007.

Las dos tendencias, empaquetadas, se han descrito como síntomas del “deterioro de la cultura cívica”.² Un modo de explotar las inacabables ambigüedades de la palabra “cultura”.³ Pero es mejor no escamotear los dos asuntos, los dos sentidos de la fórmula “cultura cívica”: el laxo, casi antropológico, que apunta al compromiso con los conciudadanos, con los valores de la comunidad, y el más ceñido, que se refiere al conocimiento de los mecanismos y de los protagonistas de la política. En el primer sentido, incluso disponemos de diagnósticos, de explicaciones de su porqué: la abstención sería la natural consecuencia de la extensión de eso que vagamente se etiqueta como “individualismo”.⁴ Intervendría de manera inmediata, de frente: los ciudadanos no verían razones para perder el tiempo en informarse, en sopesar candidatos y votar. Por dos razones: porque el voto personal, uno entre millones, resulta irrelevante y porque la política tiene un alto coste de oportunidad, porque cada vez resulta más provechoso emplear el tiempo en otras actividades que han mejorado su productividad de un modo que no parece estar al alcance de los trajines cívicos.

Pero, además, el individualismo también desencadena la abstención por vías indirectas, de costado, con subproducto de otras cosas, de procesos de atomización social que acompañan al moderno capitalismo como la fatiga al ejercicio y que han hecho trizas a ecosistemas tradicionales de socialización política. En particular, dos procesos no han pasado desapercibidos: los cambios en la familia, clásico centro de movilización electoral,

2 Un panorama de las investigaciones sobre cultura política es el de P. Lichterman y D. Cefai, “The idea of political culture”, en R. Goodin y Ch. Tilly (eds.), *The Oxford handbook of contextual political analysis*, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 392-416 (y en general los diversos trabajos contenidos en la quinta parte de ese volumen: “Culture matters”).

3 En sus acepciones más tradicionales, R. Fox y B. King, *Anthropology beyond culture*, Oxford, Berg, 2002. A. Kroeber y C. Kluckhohn, *Culture. A critical review of concepts and definitions*, Cambridge, Harvard University Press, 1952. En los últimos años, al hilo de los debates sobre la complicada relación *culture-nature*, las definiciones han puesto el acento en la transmisión individual de información y en el tipo de soporte. Así, por ejemplo: “cultura es la información capaz de afectar la conducta de los individuos y que éstos adquieren de otros miembros de su especie por medio de enseñanza, imitación y otras formas de transmisión social”, P. Richerson y R. Boyd, *Not by genes alone*, Chicago, Chicago University Press, 2005, p. 5.

4 Una extendida explicación apela a la pérdida “del capital social”, controvertida categoría con la que el autor —no sin exageración— quiere referirse “a la fraternidad, tal y como la entendían los demócratas franceses”. Véase R. Putnam, *Solo en la bolera*, Barcelona, Círculo de Lectores, 2002, p. 475. Para tratamientos más afinados de tan controvertida noción, véase P. Dasgupta e I. Serageldin (eds.), *Social capital: A multifaceted perspective*, Washington DC, World Bank, 2000.

como consecuencia de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, y los cambios en las formas de producción, que han supuesto la desaparición de los centros de trabajo como espacios de politización.⁵

Entre una y otra explicación, entre el aumento del egoísmo y las consecuencias de la extensión del mercado, una tercera destaca los cambios en la estructura cognitiva de las personas derivados de la mercantilización. Dicho en plata: los individuos cada vez echan las cuentas a propósito de más asuntos y las normas se ven socavadas cuando los individuos echan cuentas. Muchas personas dispuestas a colaborar de modo altruista en una actividad pública o fraterna dejan de hacerlo cuando aparece un asomo de retribución. El pago por aquello que hacían de balde lleva a “clasificar” mentalmente la actividad en el negociado de los costes y los beneficios, y, desde esa contabilidad, las cuentas no salen. La ampliación de los procesos sociales regulados por el mercado, el que ahora tengan precio bienes que en otro tiempo se proveían fuera del mercado de modo más o menos altruista, ha llevado a ejercer la mirada contable sobre casi todo.⁶

En el otro sentido, el común, como simple ignorancia, quizá hay más datos que explicaciones. Los datos, desde luego, son muchos. Y llamativos. Después de la cumbre de Ginebra entre Gorbachov y Reagan, recogida sin tregua por los medios de comunicación, una mayoría de norteamericanos ignoraba quién era el presidente de la URSS. En 1992, el 86% de los votantes conocía el nombre del perro de su presidente, pero apenas un 15% sabía que los dos candidatos eran partidarios de la pena de muerte. Un 30% de los estadounidenses no sabe quién gobierna en la Casa Blanca, la mitad ignora que cada estado tiene dos senadores y las tres cuartas partes desconocen la duración de su mandato.⁷ Conviene añadir que los datos no se ciñen a la política: el 79% de los adultos cree que la Tierra da vueltas alrededor del Sol.⁸ Tampoco a un país. Uno de cada cuatro británicos cree que Churchill fue un personaje de ficción. Entretanto, un 58% cree que Sherlock Holmes existió.⁹

5 C. Braconnier y J-Y. Dormagen, *La démocratie de l'abstention*, París, Gallimard, 2007.

6 R. Lane, *The market experience*, Nueva York, Cambridge University Press, 1991; K. Voks, N. Mead y M. Goode, “The psychological consequences of money”, *Science*, 2006.

7 M. Della Carpini, “In search of the informed citizen: What Americans know about politics and why it matters”, texto presentado en la conferencia sobre *The transformation of civic culture*, noviembre de 1999.

8 O en otros asuntos: <<http://gallup.com/poll/>>.

9 *The Telegraph*, 4 de febrero de 2008.

Estas tendencias necesitarían del matiz. Del matiz y del plazo. Seguramente, en escalas históricas de larga duración no resultan tan claras. Frente a las visiones románticas de las revoluciones democráticas, como acontecimientos en los que cunde el activismo político, en las que una multitud de ciudadanos informados controla la gestión de los políticos, quizá no esté de más completar el cuadro recordando que sus protagonistas lamentaban la indiferencia de sus conciudadanos, en particular, la abstención. Se lamentaban e intentaban ponerle remedio: “un ayuno de tres días, para expiar la enormidad de ese crimen” era la propuesta del poeta y activista revolucionario francés Théophile Mandar.¹⁰ La calidad de la cultura cívica de la revolución norteamericana también dejaba mucho que desear. Michael Schudson ha descrito cómo eran realmente las cosas:¹¹ un individuo (varón, blanco y propietario) analfabeto que perdía varias horas en desplazarse hasta el lugar de la votación se veía obligado a dar publicidad a su voto en presencia de las poderosas familias locales de las que surgían los candidatos, votaba sobre asuntos de los que tenía información escasa y poco fiable y que, muy probablemente, más tarde, en el camino hasta las decisiones finales, se modificarían una y mil veces.¹²

Éstos son los datos. Las valoraciones, por lo general, son lamentos. Al menos para las miradas más radicalmente comprometidas con el ideal democrático. En su opinión, el “deterioro de la cultura cívica” tiene consecuencias desastrosas: falta de legitimidad de las decisiones, secuestro de la política en manos de los poderosos, pérdida de calidad derivada de la ausencia de publicidad y de control del poder.¹³ Por otra parte, no faltan quienes sostienen lo contrario, que la abstención es una forma de legitimidad. La indiferencia ciudadana sería señal de buen funcionamiento del sistema democrático: los ciudadanos no intervienen en política porque

10 P. Gueniffey, *La revolución francesa y las elecciones*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 212.

11 M. Schudson, *The good citizen: A history of American civic life*, Nueva York, Free Press, 1998.

12 De hecho, al menos en el caso de la información en el corto plazo, también hay razones para pensar que las cosas no han cambiado respecto de lo que sucedía cincuenta años atrás. Véase M. Jennings, “Political knowledge over time and across generations”, *The Public Opinion Quarterly*, 60, 2, 1996; S. Bennett, “Trends in Americans’ political information, 1967-1987”, *American Politics Quarterly*, 17, 1989; S. Bennet, “Changing levels of political information in 1988 and 1990”, *Political Behavior*, 16, 1, 1994.

13 C. Pateman, *Participation and democracy theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1970; B. Barber, *Strong democracy: Participatory politics for a new age*, Berkeley, University of California Press, 1984.

les parece bien cómo van las cosas. Implícitamente parece asumirse que si se sintieran a disgusto, protestarían.¹⁴ En cierto modo, la segunda interpretación parece suponer una visión más optimista de los ciudadanos: si no se ocupan de la política, no es por desidia sino por convicción. Una visión optimista de los ciudadanos pero también del propio mecanismo democrático: se mostraría sensible a la participación, aunque puede funcionar sin participación.¹⁵

Las dos perspectivas comparten una valoración positiva de la participación. Sólo que mientras para la mirada más radical la participación es una condición necesaria y suficiente del buen funcionamiento de las instituciones, para la segunda es tan sólo una condición suficiente. La primera diría que la democracia no funciona porque no hace lo que los electores quieren. La segunda, que funciona porque hace lo que quieren.

Frente a ambas, una tradición liberal conservadora sostiene algo más rotundo: la democracia no funciona cuando hace lo que los electores quieren.¹⁶ Dicho de otro modo: la mejor democracia es la que menos atiende a la voluntad de los ciudadanos. Esa argumentación, que desconfía de la participación, ha apelado a diversas razones. Todas ellas comparten una pésima opinión de los ciudadanos. Todas tienen sus problemas.

LA CALIDAD DE LOS CIUDADANOS

Los argumentos a los que se ha acudido han sido muchos en una historia que se confunde con la historia de la democracia.¹⁷ Aquí me ocuparé tan sólo de aquellos que han encontrando continuidad hasta el presente. De distinta manera, arrancados de reales problemas de la democracia, han apuntado a “problemas con los ciudadanos” y han acabado por concluir que lo mejor es limitar o filtrar su voz en las decisiones que los afectan,

14 B. Ackerman, *We the people*, Cambridge, Harvard University Press, 1991.

15 Hay algo de paradójico en esta contraposición: los menos radicales tendrían una visión más optimista y revolucionaria de los ciudadanos. Implícitamente asumen que si las cosas no les gustan, se lanzarán a protestar, a los momentos revolucionarios.

16 El punto de vista de la famosa “comisión trilateral”. Véase M. Croizier, S. Huntington y J. Watanuki, *Crise of democracy*, Nueva York, New York University Press, 1975.

17 S. Giner, *Sociedad masa*, Barcelona, Península, 1979; A. Kahan, *Aristocratic liberalism*, Oxford, Oxford University Press, 1992; J. Femia, *Against the masses*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

dejar la política a los profesionales. Una conclusión precipitada. En realidad, la debilidad de los argumentos invita a pensar que hay que buscar la explicación en otra parte, en el diseño de las instituciones democráticas. Sencillamente, no están pensadas para contar con los ciudadanos.

La ignorancia

La primera argumentación arranca con una constatación. Nuestras sociedades resultan enormemente complejas. Las decisiones legislativas atañen a múltiples asuntos, cada uno de ellos provisto de mil matices. Para abordarlos necesitamos cada vez más conocimientos. Resulta impensable que los ciudadanos puedan formarse opiniones meditadas sobre planes hidrológicos, políticas ambientales, relaciones exteriores, tipos de cambio o administración de justicia. En esas condiciones, según algunos, la participación sería un modo seguro de llevar a las peores decisiones.

La argumentación es menos terminante de lo que parece. Por lo pronto, que las sociedades sean complejas no quiere decir que para desenvolverse en ellas se requiera más información. La complejidad es deudora de muchas circunstancias, entre ellas del nivel de educación, de nuestra capacidad computacional y del diseño de las instituciones democráticas, más exactamente, de la base informativa que necesitan para funcionar.¹⁸ El mercado es un buen ejemplo de cómo la administración de la complejidad no requiere competencia en el manejo de la información por parte de los agentes. Con atendibles razones, sus apologistas lo han repetido una y mil veces. En un mercado competitivo toda la información relevante está contenida en los precios: qué se debe producir, en qué cantidad, cómo deben asignarse los recursos.¹⁹ Thomas Sowell sistematiza y generaliza la tesis:

¿Cuál es entonces la ventaja intelectual de la civilización sobre las sociedades primitivas? Pues que no es necesario que cada hombre civilizado tenga más conocimiento, sino menos. Un salvaje primitivo debe ser capaz él mismo de producir una amplia variedad de bienes y servicios [...].

18 Para propuestas acerca de cómo mejorar la competencia cívica, véanse A. Lupia, "Questioning our competence: improving the practical relevance of political knowledge measures", ponencia presentada en el encuentro anual de la Midwest Political Science Association, Chicago, IL, abril de 2005; S. Elkin y K. Soltan (eds.), *Citizen competence and democratic institutions*, University Park, Penn State Press, 1999.

19 F. A. Hayek, "Economics and knowledge", *Economica*, 4, 1937. Más en general, véase G. O'Driscoll, "Spontaneous order and the coordination of economic activities", *Journal of Libertarian Studies*, 1, 2, 1977.

Por el contrario, el contable civilizado o el experto electrónico, etc., apenas necesita saber nada más que sobre contabilidad o electrónica. La comida llega al supermercado local a través de procesos que probablemente ignora. Vive en casas construidas a través de una trama de procesos cuyas complejidades políticas, económicas y técnicas apenas puede llegar a imaginar [...]. La civilización es un enorme dispositivo para economizar información.²⁰

Nadie discutirá que en los otros dos aspectos —el nivel de educación y las herramientas para capturar y procesar información— nos encontramos hoy mucho mejor que hace doscientos años. Desde los automóviles hasta los ordenadores, todos hemos tenido la experiencia de cómo el avance y la sofisticación de la técnica han ido acompañados de un menor grado de exigencia de conocimiento de los usuarios acerca de los entresijos de su funcionamiento. En el caso de la política, la posibilidad de transmitir información sin costes asociada con las nuevas tecnologías abre nuevas oportunidades. Hoy no hay ninguna imposibilidad técnica para que todos puedan acceder a los presupuestos del Estado. Ello no quiere decir que cada ciudadano esté en condiciones de valorar o de entender cada información. El reto no es que todos sepamos de todo, sino que siempre que alguien quiera pueda acceder a la información sobre los asuntos públicos y sobre su gestión.

En todo caso, en lo que atañe a la democracia, aun aceptando la tesis de la complejidad de los problemas, difícilmente se puede tomar como una premisa en favor de las élites políticas. La misma argumentación, tomada en serio, recomendaría prescindir de los políticos. Fuera de su limitado ámbito de competencia profesional, un político no está mejor pertrechado que un ciudadano. Es improbable que un representante con formación como abogado o médico entienda el funcionamiento del mercado financiero. En el mejor de los casos, las clases políticas se nutren de profesionales (economistas, abogados) cuyas disciplinas están subdivididas en múltiples campos. Un excelente profesor de economía laboral

20 T. Sowell, *Knowledge and decisions*, Nueva York, Basic Books, 1980, p. 7. En ese sentido, acerca de la enorme inteligencia necesaria para sobrevivir en la Edad de Piedra resultan particularmente interesantes los primeros capítulos del deslumbrante ensayo de J. Diamond, *Armas, gérmenes y acero*, Madrid, Debate, 2006. Por lo demás, sabemos que la domesticación de ciertas especies (como la de los lobos) se ha traducido en una disminución de la complejidad de su cerebro, véase J. Allman, *Evolving brains*, Nueva York, Scientific American Library, 1999, pp. 204-207.

puede ser un perfecto ignorante en economía internacional o en hacienda pública. Un constitucionalista puede no tener idea sobre las complejidades del derecho civil, el tributario o el internacional. En la mayor parte de las decisiones están subordinados a técnicos que les describen y les estructuran los problemas y, con ellos, buena parte de “las soluciones”. El reconocimiento de esa circunstancia subyace a una parte importante de la clásica teoría económica de la burocracia.²¹ Muy en general, esa teoría muestra que los diversos organismos de la administración tienen una posición de monopolio del suministro de la información con respecto a los departamentos políticos con patológicas consecuencias: entre otros asuntos, administran el peso de los problemas, la relación entre el presupuesto concedido y la actividad real desarrollada. Los políticos pueden desconfiar, pero, a la hora de la verdad, están perdidos.

En principio, la solución, para ciudadanos y para políticos, vendría a ser la misma: técnicos confiables que asesoren y perfilen en debate público las preguntas y los dilemas. En realidad, con la participación las cosas podrían mejorar. A los parlamentarios, que son pocos, la información les resulta inmanejable. Por el contrario, una vez que resulta accesible para cualquiera, se da la oportunidad de que los interesados (y en condiciones de interpretar la información) adviertan a los demás, a aquellos con los que mantienen lazos estables y de confianza. El número antes que un problema es una solución: siempre podrán encontrarse ciudadanos competentes e interesados, a diferencia de lo que sucede en el Parlamento. No se trata de que todos estén en todo, sino de que siempre quede la posibilidad de que alguien pueda acceder a la parte del todo que le interesa a él y a los demás para poder hacerles llegar sus conclusiones.²²

La inconsistencia

En este caso, la crítica a la participación arranca recordando ciertos resultados de la teoría social que dificultarían hablar con sentido preciso de los “deseos de la mayoría” o de “voluntad general”. Según ciertos autores, no habría manera de traducir las preferencias de los ciudadanos en una preferencia colectiva. La voluntad general sería inconsistente en el mismo sentido en el que es inconsistente quien prefiere Andrea a Berta, Berta a Carmen y, a la vez, Carmen a Andrea. Pues bien, eso que, en pequeñas dosis,

21 W. Niskanen, *Bureaucracy and representative government*, Cheltenham, Reino Unido, Edward Elgar, 1971; “La peculiar economía de la burocracia”, *Hacienda Pública*, 18, 52, 1978.

22 Véase P. Rosanvallon, *La contra-democracia*, París, Seuil, 2006.

todos padecemos, pero que, mal que bien, nos vemos obligados a resolver porque debemos tomar una decisión y quedarnos con una de las tres, sucede con bastante naturalidad cuando se trata de elecciones colectivas. Dentro del mismo conjunto de individuos hay una mayoría que prefiere A a B, otra que prefiere B a C y una tercera que entre A y C se queda con C. Al cabo, los famosos versos de *Song of my self*: “I contradict myself/ (I am large, I contain multitudes)”.

El punto de partida más sólido es un importante resultado de la teoría de la elección social que demuestra que no existe un mecanismo democrático de toma de decisiones (la regla de la mayoría, por ejemplo), respetuoso con elementales principios, que sea capaz de reunir sin sombra de ambigüedad las preferencias de los votantes en una preferencia agregada “inteligible”.²³ El teorema (de Arrow) generaliza y formaliza una conocida paradoja (de Condorcet) que nos dice que cuando al menos tres individuos participan en una elección con al menos tres opciones, no es seguro que se pueda obtener algo parecido a una preferencia colectiva que “sume” sus preferencias. Es más, con frecuencia se dará un movimiento cíclico perpetuo entre las diversas opciones: la opción A ganará a la B, ésta a la C, que a su vez ganará a la A, y vuelta a empezar.

Bastantes comentaristas han interpretado el teorema de Arrow como una descalificación de la idea de voluntad general: no es que no se la pueda conocer, sino que no hay nada que conocer.²⁴ Su descalificación se refiere a la idea y, detrás de ella, a la justificación de la democracia como un sistema que permite tomar en cuenta las preferencias de los ciudadanos sobre los estados de cosas (y, por supuesto, con más razón, como una forma de “autogobierno colectivo”). En su opinión, la idea de voluntad general es la muestra de una falacia (de la composición) que lleva a extrapolar a la colectividad propiedades que, a lo sumo, valen sólo para los individuos. Racionalidad, voluntad o autogobierno son atributos de los individuos, no de las sociedades. La democracia viable, la liberal, concluyen, nada tiene que ver con la participación y con la voluntad general. Es un simple sistema para penalizar y seleccionar élites políticas a través de la competencia electoral.

La discusión en torno de las implicaciones de este y de otros teoremas de la elección es inacabable y con un alto grado de tecnicismo.²⁵ Tradicio-

23 K. Arrow, *Social choice and individual values*, Nueva York, John Wiley & Sons, 1951. Véase el próximo capítulo.

24 W. Riker, *Liberalism against populism. A confrontation between the theory of democracy and the theory of social choice*, San Francisco, Freeman, 1982.

25 C. List, *Mission impossible? The problem of democratic aggregation in the face of Arrow's theorem*. <<http://personal.lse.ac.uk/LIST/research.htm>>.

nalmente, las réplicas a la interpretación expuesta han adoptado la estrategia de debilitar o reformular algunos de los axiomas y, por ende, de los resultados que servían de partida a los críticos de la participación. En otras ocasiones se ha discutido la lectura, la interpretación, se ha mostrado el limitado alcance empírico de tales resultados, cuando no la simple falsedad de lo invocado.²⁶ En todo caso, cuesta entender por qué los críticos de la participación detienen sus críticas en las puertas de la democracia liberal. En tanto las teorías invocadas se refieren a cualquier sistema de elección, sus argumentos también deberían descalificar al mecanismo de selección y de penalización de élites.

Por otra parte, no cabe descartar que nuevos diseños institucionales, también democráticos, eviten o aligeren los problemas de agregación.²⁷ En particular, cabe pensar en procesos deliberativos que filtren las distintas opciones a la luz de criterios de imparcialidad y justicia. La argumentación permitiría reducir las alternativas o bien ordenarlas según jerarquías de principios. La primera posibilidad se ampara en el supuesto, fundamental para las propuestas deliberativas, de que aunque todas las opiniones han de estar en condiciones de poder expresarse, no todas valen igual. Antes de “sumarse”, las preferencias habrían de justificarse en una pública discusión que las ponderase y las cribase. Con menos opciones, eliminadas las manifiestamente irracionales o inmorales, es menos probable que surjan los problemas de “inconsistencia” en una voluntad general en la que no todo ha de integrarse. Con esa estrategia, se “circunvalan”, por así decir, algunos de los axiomas del teorema de Arrow y, por ende, sus pesimistas conclusiones.

La otra posibilidad apunta al reconocimiento de que la deliberación permite identificar afinidades, jerarquizar las propuestas y reducir las dimensiones de los problemas. Sería posible, por ejemplo, mostrar que según cierto criterio normativo las iniciativas A, B y C, que parecen diferentes, están ordenadas. De ese modo cabría conmensurar propuestas –agrupando algunas desde consideraciones energéticas, por ejemplo– en una misma escala y, con ello, reducir los ámbitos de elección a las opciones más básicas comprometidas en la elección. En la comunidad política sucedería algo parecido a lo que sucede en el ámbito personal. Puedo querer entregarme a la disipación (D) y, a la vez, cultivar mi espíritu (E), trabajar en algo que

26 G. Mackie, *Democracy defended*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

27 J. Coleman y J. Ferejohn, “Democracy and social choice”, *Ethics*, 97, 2006; D. Miller, “Deliberative democracy and social choice”, *Political Studies*, 40, 1992; J. Dryzek y C. List, “Social choice theory and deliberative democracy: A reconciliation”, *British Journal of Political Science*, 33, 2003.

me gusta (T) y hacerme rico (R), pero, después de una reflexión acerca de la idea de vida que me parece razonable, puedo ordenar esas preferencias desde otras más ponderadas (metapreferencias), desde principios más básicos acerca de qué tipo de vida me parece importante llevar, y reducir las opciones: si quiero ser un libertino, he de elegir el paquete L, con el orden (D, R, T, E); si quiero ser un filósofo, elegiré el F, con el orden (E, T, D, R).²⁸ Por una vía o por otra, por el filtrado o por la jerarquía de las preferencias, la deliberación ayudaría a encontrar vías de solución al problema de la agregación.²⁹

El egoísmo

Esta estrategia viene a decir que lo del *zoom politikon* es un cuento, que “los ciudadanos pasan de la política”. Y que no les faltan razones. La actividad política exige tiempo y esfuerzos. Hay que informarse, comparar y, por lo menos, ir a votar. Todo ello, en nombre de los intereses generales. Además, la probabilidad de que el propio voto, uno entre millones, tenga impacto es casi nula. Es difícil pensar que la gente dedique tiempo y esfuerzo a una tarea prácticamente inútil y que, en todo caso, beneficiará por igual tanto a quienes lo hacen como a quienes no. A esto se añade la circunstancia ya mencionada de que, por su propia naturaleza, a la hora de mejorar su productividad la política siempre va a la zaga respecto de otras actividades. Dicho de otro modo, cada vez es mayor el coste (de oportunidad) de emplear el tiempo en los asuntos públicos.³⁰ En suma, un mal negocio.

28 J. Harsanyi, “Cardinal welfare, individualistic ethics, and interpersonal comparisons of utility”, *Journal of Political Economy*, 63, 1955; H. Frankfurt, “Freedom of the will and the concept of a person”, *Journal of Philosophy*, 68, 1971.

29 Con todo, no cabe ignorar que las cosas también pueden ir en sentido contrario, que la deliberación, antes que simplificar las decisiones, las complique, como se verá en el capítulo siguiente y en el capítulo v.

30 Una característica de las actividades orientadas hacia el mercado es que, tendencialmente, han mejorado su productividad. Cada vez se necesita menos tiempo para obtener el mismo resultado (en rigor no sería así: todo cambio técnico en los sistemas de producción acostumbra a conllevar cambios en el producto; véase N. Rosenberg, *Perspectives on technology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1976). En otros casos, donde por circunstancias técnicas –como sucede con la producción doméstica– la productividad no resultaba sencilla de mejorar, es el coste de oportunidad el que lleva a terminar con la actividad. Se prefiere dedicar a las actividades mejor retribuidas las horas que antes se dedicaban a lavar o a cocinar y dejar a otros –con técnicas de producción más eficientes: lavanderías, restaurantes– tales trabajos. Pero eso no sucede con todas las actividades. Algunas de ellas, desde la perspectiva económica, no mejoran su